

Capítulo 1

Llegaron los buitres

Durante la tercera semana de noviembre de 2001, la Argentina ya sabe cuál será su destino. Está inmersa en la crisis económica más grande de su historia, y es inevitable que en cualquier momento caiga en un default. La deuda de 144.000 millones de dólares es impagable. Ninguno de los intentos de los últimos meses de gobierno de la Alianza dio resultado: ni el blindaje, ni el megacanje, ni la entrada de Domingo Cavallo como creador y salvador de la criatura del uno a uno. Tampoco ayuda un presidente débil hasta el extremo, perdidioso en las elecciones de octubre de 2001, en las que ni siquiera tuvo candidatos propios que ganaran o fueran vencidos; durante la campaña, nadie quiso decir que apoyaba a Fernando de la Rúa. Para peor, el triunfador en esos comicios fue el peronismo, un movimiento-partido, que si de algo sabe, desde 1983, es de llegar al poder en momentos de crisis terminal. Para el Partido Justicialista (PJ) lo primero es llegar a la Casa Rosada, y luego ver cómo resolver los problemas. Planes sobran. Pero primero lo primero. Que Fernando de la Rúa deje de ser presidente.

En ese noviembre de 2001 los informados de siempre, los que casi nunca pierden, sabían lo que iba a ocurrir: primero se produciría algún hecho violento o crítico social que terminaría con la fallida experiencia de la Alianza. Luego, un gobierno peronista de transición tomaría las medidas impopulares que fueran necesarias. Sería un hombre que se inmolaría por la causa, pero que tendría el reconocimiento futuro que se mereciera. Este gobierno debería tomar dos medidas: devaluar el peso y declarar el default temporario de la deuda externa. A continuación, un segundo gobierno, también peronista, con elecciones o no, reconstruiría la situación política y terminaría el mandato delaruiista. El peronismo

estaría así otros 10 años como mínimo en el poder. En otras palabras, un plan duro, pero perfecto, que se venía maquinando en las mentes justicialistas, especialmente en las de los gobernadores, desde el verano de 2001 cuando ya se veía que cualquier esfuerzo o plan aliancista estaba destinado al fracaso.

Para el peronismo que iba a manejar el país eran tiempos de resolver quiénes perderían poco (ellos), quiénes algo, quiénes mucho y quiénes todo.

Hacia fines del año 2001, los mercados, pese a las interminables señales de seducción que ya a cada hora les enviaba el gobierno, le dieron la espalda a lo que quedaba de la Alianza. Sólo esperaron el final, aunque aún no sabían bien qué características tendría la crisis definitiva del gobierno del radical y del ex ministro de Carlos Menem, padre de la convertibilidad, a esa altura una sombra de lo que había sido como gestor todopoderoso del uno a uno.

Hacía sólo unos días había canchereado contra el mercado definiendo a los oficiales de cuentas de Wall Street y a los técnicos del FMI como “miopes”. Había intentado convencer a los políticos argentinos sobre su realidad keynesiana y sobre el apoyo que tendría su gestión desde el exterior (hablando en dólares contantes y sonantes para sostener su invento contable). Dormía menos de cuatro horas diarias atendiendo personalmente todas las llamadas que avanzaban como fuego desde los mercados centrales del mundo y sus colaboradores le tenían más miedo que nunca a su inestabilidad emocional. Nada alcanzó, y la crisis lo terminó de arrastrar definitivamente en esa Navidad de 2001, sólo horas antes de que también Fernando de la Rúa tuviera que dejar su cargo de Presidente de la Nación en un helicóptero que nunca llegó a aterrizar en el techo de la Casa Rosada, y cuya foto es hoy leyenda.

La deuda pública hacía rato que era nota de tapa de los diarios como tema de cobertura popular, a la par de los resultados del fútbol, los amoríos y desamoríos de los famosos (imprescindibles en días en los que hay que distraer la mente agobiada de malas noticias), las desgracias de la Alianza y las andanzas de los políticos justicialistas, que a esa altura olían sangre. Casi como los resultados de los juegos de azar, los argentinos esperaban, a partir de las 16:30 horas, el cierre de un dato estrella: el Riesgo País, que cada día rompía un nuevo récord. Por un tiempo, se trató de una variable muy téc-

nica, casi sofisticada, elaborada por unos actores que luego también se harían famosos: las calificadoras de riesgo. Su informe diario era propalado por los periodistas especializados en mercado primero, en economía en general después, en actualidad luego, hasta terminar en boca de cualquier comunicador con un micrófono en una radio o una cámara en televisión. De modo que, aunque sea de una manera rudimentaria, cualquier argentino podía dar una explicación más o menos sólida sobre la variable y lo mal que le hacía a su economía ser record mundial.

Cada noche, el humorista Martín Bilik (una especie de *star* por sus personajes) parodiaba en *Después de Hora* (el programa que conducía en esos años Daniel Hadad por América 2) a un Fernando de la Rúa agobiado pero festejando esos récords diarios de riesgo país como si fueran goles inolvidables y definitorios de algún campeonato.

Desde el gobierno intentaron presionar para que terminen las burlas, pero para ese entonces, De la Rúa ya era un presidente que carecía de poder, incluso para pedirle clemencia al conductor y que Bilik amaine su corrosivo personaje. Por el contrario, el imitador redobló la apuesta y una noche de aquel noviembre aparece en la pantalla con un cartel con un número: 5.000 puntos. Así, festejó un nuevo record mundial. Cavallo no le iba en saga, y la otrora imagen de ministro plenipotenciario ahora era una sombra.

Los inversores de nombres curiosos

Esa Argentina del período octubre-noviembre de 2001 era el último país del mundo donde un inversor medianamente serio e informado hubiera puesto un dólar. Sin embargo, hubo operaciones de compra de títulos públicos nominales por no menos de U\$S 3.000 millones nominales. Eran de fondos buitres que, tras seguir de cerca la situación durante casi un año, cesaron de sobrevolar en círculos y decidieron aterrizar y comenzar a desplegar su estrategia clásica de comprar barato en un momento de crisis terminal, para luego accionar en el día indicado. Esos U\$S 3.000 millones nominales se calculan a partir del precio de emisión de los bonos que compraron en esos días fondos de nombres curiosos y, en algunos casos, hasta impactantes. En esas jornadas, las mesas de dinero reci-

bían órdenes de compras directas o preguntas sobre oportunidades de adquisición de títulos de deuda de marcas como NML Elliott, el NM LTD, Gramercy, Southern Cross, Leucadia, W. R. Huff, Fintech, Aurelius, Olifant, Blue Angel, ACP Master, Los Angeles Capital Meridian, HWB Victoria Strategies, FFI Found, Caronte LTD, Old Castle Holding, Wilton Capital, Zylberberg Fein LLC, Vr Global Partners y Capital Ventures entre otros. Todos nombres que en la Argentina de los dorados noventa ni siquiera se conocían como existentes, pese a haber sido años de abundantes aventuras inversoras de fondos de capital de todo tipo de pelaje y prontuario. Eran nombres absolutamente nuevos, que en esta ocasión tenían su oportunidad.

Entretanto, los argentinos intentaban convivir con un nivel de pobreza que llegaba al 35,5% y una indigencia que acariciaba ya el 15% de la población, un desempleo que en cinco años había pasado del 5,1 al 17,4% y llegaría casi al 25% en el peor momento, una economía en recesión crónica desde hacía tres años y una clase política y económica que competía por ser la peor del mundo. El problema madre era, técnicamente, la abultada deuda pública de la Argentina que a fines de 2001 llegaba a U\$S 144.453 millones, cuando 10 años antes (ya entonces era un problema muy serio que había ayudado a derribar el primer gobierno de la democracia de Raúl Alfonsín) se ubicaba en los U\$S 50.100 millones.

De esa deuda pública, la emitida en títulos públicos representaba el 73% del total. El resto correspondía fundamentalmente a organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Club de París. Dicho de otro modo, el principal problema de deuda de la Argentina no era la que se tenía con estos organismos, sino la deuda a privados, a los tenedores de bonos, la mayoría connacionales tenedores de títulos a partir de la creación de la jubilación privada y las Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión (AFJP). La mayor parte de los títulos estaba emitida en dólares (el 73%), seguido de Euros (17%) y yenes japoneses (9%). En los días de gloria de la convertibilidad, la Argentina se había puesto cada vez más sofisticada en la realización de operaciones múltiples de colocación de deuda emitiendo títulos en libras esterlinas, francos suizos, coronas danesas y suecas, dólar canadiense y hasta en dinares kuwaitíes.

Así, durante el último trimestre de 2001 la ecuación consistía en saber determinar en qué momento la clase política reconocería y asumiría públicamente la imposibilidad de afrontar los pagos de esa deuda imposible de administrar. ¿Sería el 24 de diciembre (el día previo a Navidad, la Argentina tenía en su organigrama vencimientos que atender) cuando debían pagarse unos U\$S 504,2 millones en Letes? ¿Sería el 15 de enero de 2002, cuando se tenían que liquidar U\$S 553 millones? Fue antes. El 20 de diciembre el gobierno de Fernando de la Rúa llegó a su fin, y con él, la Argentina se zambullía de lleno en un muy largo período de reconocimiento y reestructuración de su problema más serio: la abultada e inmanejable deuda externa.

En ese país de crisis económica terminal, muertes en las calles de militantes protestando contra la clase política con el slogan “Que se vayan todos” y aproximación a medidas que sólo prometían sangre, sudor, lágrimas y más sangre, sólo había un grupo de inversores interesados en comprar títulos de deuda. Eran esas firmas con nombres curiosos, algunos hasta graciosos, ésas que llamaban a Cristian y a otros operadores como él, otrora yuppies de una Argentina que se dirigía inexorablemente a lo mejor del primer mundo, para comprar bonos de deuda al precio que sea, pero lo más pronto posible. Eran los únicos que parecían apostar a hacer negocios en medio del naufragio económico con una clase política atontada sin saber qué decisiones tomar. Decisiones que de todas maneras difícilmente se cumplirían.

Se trataba, como le avisaron a Cristian desde Estados Unidos, de “los buitres”; especializados en sobrevolar las catástrofes económicas de los países en desarrollo, buscar las oportunidades más baratas y riesgosas de las crisis de estos estados y después esperar no una recuperación de esa economía sino litigar ante los tribunales de cualquier país del mundo donde la deuda haya sido emitida, disfrutando de las rentabilidades más abultadas y generosas del capitalismo moderno. En esos días, el precio que pagaban por los bonos argentinos era de no más del 20% de su valor. Lo que buscarían entonces era que, con el tiempo, el gobierno que manejara a la Argentina o algún tribunal les reconociera el 100% de esa deuda.

El default

Tras la renuncia de Fernando de la Rúa, un sector del peronismo tomó el poder y el domingo 23 de diciembre de 2001 Adolfo Rodríguez Saá asumió la Presidencia de la Nación. El lunes 24 debía pagar dos vencimientos de U\$S 13 millones al FMI y otros U\$S 5 millones en Eurobonos. El puntano no pagaría ninguna de esas deudas, lo que se convertiría simbólicamente en el primer paso del default inevitable en que caería la Argentina.

Rodríguez Saá lo anunciaría en su asunción presidencial durante la Asamblea Legislativa de ese recordado domingo. En medio de una tribuna colmada de diputados, legisladores y militantes varios que literalmente se caía abajo en festejos, el presidente de la Nación entrante decía:

Vamos a tomar el todo por las astas [...] En primer lugar anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Esto no significa el repudio de la deuda externa ni una actitud fundamentalista. Muy por el contrario, se trata del primer acto de gobierno que tiene carácter racional para darle al tema de la deuda externa el tratamiento correcto. [...] Los dineros que estén previstos en el presupuesto para pagar la deuda, mientras los pagos estén suspendidos, serán utilizados en los planes de creación de fuentes de trabajo. No podemos obviar con crudeza que algunos dicen que la llamada deuda externa es, al menos, el más grande negociado económico que haya vivido la Argentina.

Con los años, Rodríguez Saá contaría que en realidad hubo un problema de redacción, comunicación y comprensión en su mensaje por parte de esa Asamblea Legislativa que lo estaba formalizando como jefe de Estado. Lo que dijo era que su gobierno se tomaría sólo unos días para coordinar los pagos, mientras se lanzaba un gran plan de reestructuración de deuda con acuerdo de los organismos financieros y económicos internacionales, del tipo que luego encararía Néstor Kirchner. No importaba en realidad lo que el puntano quiso decir, ni que estaba anunciando un largo proceso de negociación con acreedores –situación por la que habían pasado muchos estados y que en ningún caso se trató de una experiencia ni fácil ni gratuita para una sociedad—. Lo que Rodríguez Saá estaba anticipando era un pe-

ríodo donde el país estaría fuera del mundo financiero, viviendo como un paria internacional, haciendo que sus habitantes pobres sean aún más pobres y los indigentes más indigentes; y que, en definitiva, había llegado el momento de pagar una fiesta a la que la mayoría de los argentinos no había sido invitada.

Igualmente la clase política festejó ese default y aplaudió como nunca una ley votada en ese Congreso repleto de diciembre de 2001. Nadie tenía en realidad nada que festejar. Nadie salvo un grupo. Para los fondos buitres había llegado, quizá antes de lo previsto, la oportunidad que se esperaba para comenzar a desplegar su estrategia clásica: el momento en que un país les reconocía que la deuda que habían comprado no sería pagada en tiempo y forma. Se les anunciaba que habría un proceso de reestructuración, del que no participarían, y el momento en que comenzarían a trabajar a destajo las oficinas legales de los fondos (el corazón mismo de estas organizaciones financieras) para diseñar la mejor estrategia jurídica para litigar contra ese país.

Quedaría sólo un legado del paso de Rodríguez Saá por la presidencia de la Nación: la declaración del default. El resto de sus medidas para “100 días de gobierno peronista”, fueron borradas por el propio peronismo, que eyectó al puntano al no haber querido tomar la medida maldita para la que había sido apoyado en su intención de llegar a la Casa de Gobierno. Por recomendaciones externas y por convicciones propias, Rodríguez Saá no había querido devaluar el peso. Su intención era otra, y un poco curiosa. Había proyectado el lanzamiento de una nueva cuasimoneda, el “argentino”, por unos \$ 15.000 millones (en ese momento continuaba la convertibilidad, al menos en la formalidad), dinero que además serviría para fomentar la circulación de moneda. La idea primaria había sido de Juan José Llach, economista que fue viceministro de Domingo Cavallo y ministro de Educación de Fernando de la Rúa, pero con montos que no superaran los \$5.000 millones y en Lecops, otra cuasimoneda ya conocida. El secretario de Hacienda de Rodríguez Saá, Rodolfo Frigeri, tenía la idea de otra cuasimoneda, no importaba el nombre, pero con una cotización de 1,4 pesos por dólar, como fórmula además para ir saliendo paulatinamente del uno a uno mientras se discutía la forma de salir del “corralito” financiero que había decidido Domingo Cavallo con De la Rúa para frenar la fuga de dólares del sistema bancario.

Estos proyectos fueron el primer alerta para las oficinas legales de los fondos buitres en sus sedes de las islas Caimán, Nueva York, Isla de Man, o donde tuvieran sus sedes, que esperaban pacientemente el momento de atacar. Ése sería cuando formalmente, y más allá de las declaraciones de Rodríguez Saá a la Asamblea Legislativa, se reglamentara en un decreto o una resolución que el país no reconocería el pago de su deuda y propusiera una suspensión o una liquidación en cuasimonedas o cualquier otro invento. No pudo ser. Rodríguez Saá, sus proyectos para los 100 días, incluyendo el argentino de los 15.000 millones de pesos, tuvieron que abandonar la presidencia.

Fue el 30 de diciembre de 2001, cuando sus ex colegas gobernadores peronistas no se presentaron a la reunión a la que el puntano había convocado en la residencia presidencial de verano de Chapadmalal, al sur del balneario de Mar del Plata. A la cita habían sido llamados el cordobés José Manuel de la Sota, el santafesino Carlos Reutemann, el fueguino Carlos Manfredotti, el pampeano Rubén Marín, el bonarense Carlos Ruckauf y el santacruceño Néstor Kirchner. Cada uno expuso razones diferentes para justificar su ausencia: inclemencias temporales, indisposiciones gástricas, problemas familiares ligados con el fin de año, falta de combustible e incluso no conocer exactamente dónde quedaba el lugar. Una marcha cacerolera de habitantes de la zona, que amenazaba seriamente con ingresar al predio escasamente (por no decir nulamente) custodiado, hizo que finalmente Rodríguez Saá eligiera irse del lugar, huir vía el aeropuerto de Miramar y desde allí volar a su querida San Luis para anunciar en vivo y directo a todo el país en la noche de ese 30 de diciembre que renunciaba. Para él todo había salido mal por una conspiración del senador bonaerense Eduardo Duhalde, y que su eyección se debió a que no quiso devaluar el peso, salir formalmente de la convertibilidad y firmar el maldito decreto de la suspensión indefinida del pago de la deuda. Al no haber un acto legal que reconociera esta última declaración, no había aún alternativa legal de litigar contra la Argentina.

La sucesión presidencial recayó en Eduardo Camaño, peronista y presidente de la Cámara de Diputados. Duhaldistas de ley, convocó a una nueva Asamblea Legislativa y negoció los acuerdos políticos necesarios para que su jefe bonaerense llegara a la presidencia. Así lo hizo el 2 de enero de 2002, con mandato hasta el 10 de diciembre de 2003, esto es, hasta completar el mandato inconcluso de Fernando de la Rúa.

Duhalde sería entonces el encargado de firmar la medida esperada: la salida del Plan de Convertibilidad que regía desde 1991 y que mantuvo por algo más de una década la paridad uno a uno entre el peso y el dólar. La decisión formal fue tomada por el Congreso el 6 de enero de 2002 a través de la derogación de la ley de Convertibilidad 23.928, y la ley 25.466 de intangibilidad de los depósitos. Se delegó además en el Poder Ejecutivo el establecimiento de una nueva paridad entre el peso y el dólar y la reglamentación de un nuevo régimen cambiario. Según el ministro de Economía del primer duhaldismo, Jorge Remes Lenicov, todo se hacía para volver a ser *“un país normal”*.

Lenicov ya tenía redactada, desde el 4 de enero, el acta de defunción de la convertibilidad en sus aspectos técnicos, fijando una nueva paridad en 1,4 pesos por dólar, la cotización que habrían tenido los bonos que Frigeri le propuso a Rodríguez Saá. La idea primaria era, además, desdoblar el tipo de cambio, con un precio fijo para las operaciones de comercio exterior y un dólar libre para el resto de la economía. De ese modo, se enfrentaba legalmente la salida de la convertibilidad y comenzaba una nueva era para la economía argentina. Pero faltaba el otro 50% del problema: la declaración formal y por escrito del default y el llamado a reestructurar la deuda argentina. Era la decisión que necesitaban los fondos buitres para comenzar a accionar, quienes además por esos días continuaban comprando deuda a destajo. El registro contable del Banco Central de esas primeras semanas de 2002 hablan de operaciones por U\$S 1.000 millones a un valor nominal de un 18% del precio de emisión. Estos fondos superaban ya las tenencias por U\$S 8.000 millones nominales, e iban por más.

La devaluación

Duhalde había asumido su mandato con un Congreso algo más calmo que el que había ovacionado el default declamativo de Rodríguez Saá. Sin embargo hizo otra promesa, al menos, poco estudiada: “Van a ser respetadas las monedas en que fueron pactados originalmente los depósitos y quien depositó pesos recibirá pesos y quien depositó dólares recibirá dólares”. Nuevamente los fondos buitres comenzaban a revolotear; sabían que la promesa sería imposible de cumplir y que la realidad llevaría a que se reconociera que

no se podían pagar ni pesos ni dólares ni bonos. El 3 de febrero, Duhalde firmó el decreto 214/2002 de Necesidad y Urgencia por el que se “pesificaron” forzosamente las deudas y créditos (uno a uno) y los depósitos bancarios de (1,4 a 1 por dólar), y se dispuso además la estatización de parte de la deuda privada de los bancos con los particulares, al compensarles la diferencia entre \$1 y \$1,4, con una deuda que quedaría a cargo del sector público, pero nada aclaraba de los títulos públicos. Con la deuda pública bordeando ya los U\$S 112.616 millones (había bajado luego de una primera pesificación de deuda en poder de títulos públicos en provincias y bancos provinciales y privados nacionales) el entonces secretario de Finanzas, el bonarense Lisandro Barry hizo un planteo al secretario del Tesoro norteamericano John Barry, de visita en marzo de 2002 a Fortaleza, Brasil, donde participaba de la asamblea anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Barry hablaba con el enviado de George Bush a la región sobre los palos en la rueda que la vicejefa del FMI Anne Krueger le estaba poniendo al país para firmar un acuerdo con el organismo y poder anunciar el lanzamiento de un plan de reestructuración de la deuda argentina. Le planteó la falta de apoyo de los gobiernos centrales a un país virtualmente en quiebra y al que le pedían cada vez más ajustes imposibles de aplicar en una sociedad en ebullición y violencia callejera. Fue finalmente al punto clave: “Necesitamos que nos apoyen en un esquema de renegociación de la deuda en default que consista en una quita de 70% a los acreedores privados a cambio de asegurarles un superávit de no menos de 5% anual”. El norteamericano sonrió, pareció tomar nota, y dio por terminada la reunión de Fortaleza.

Con el tiempo, algún enviado de Bush a Buenos Aires le aclararía personalmente a Eduardo Duhalde que el problema no habría sido la quita de deuda de ese 70%, que para Estados Unidos era un problema entre privados con la Argentina. Lo que no le creía al Gobierno Nacional era que logran la promesa de un superávit fiscal del 5% del PBI. Se supo también que había sido Anne Krueger quien minutos antes de comenzar la reunión entre Taylor y Barry en Fortaleza había hablado telefónicamente con el norteamericano para que no apoyara ninguna de las ideas de la Argentina, país que aún tenía mucho que hacer en materia de ajustes para que pueda ser tomado en serio. Esa reunión de Barry con Taylor resultó el primer planteo sobre una reestructuración de deuda con quita importante como mecanismo para salir del default.

Un fallo de la Corte Suprema que ordenaba al Gobierno (el fallo Smith) a devolver dólares a un ahorrista, la negativa de Duhalde de avanzar en un plan tipo Bonex como salida del “corralito”, un esquema fiscal de ajuste del gasto provincial como mecanismo para que el precio del dólar comenzara a equilibrarse (llegaba a 3,8% en ese marzo de 2002) y la sensación de falta de apoyo presidencial para su estrategia hicieron que finalmente Remes Lenicov considerara que su gestión había llegado a su fin, que había hecho todo lo posible por mantener la nave a flote, pero que sin un fuerte respaldo político nada de lo que venía adelante sería posible. Presentó finalmente su renuncia el 23 de abril, luego de un viaje a los Estados Unidos donde no obtuvo resultados positivos para un eventual nuevo paquete de préstamos del organismo para poner en caja los vencimientos más próximos.

Como sucesores se mencionaron cinco economistas: Humberto Peteri, Guillermo Calvo, Alietto Guadagni, Javier González Fraga y Rodolfo Frigeri. Sin embargo, un encuentro con el ex presidente radical Raul Alfonsín (que en esos días turbulentos tenía línea directa con la casa de Gobierno de Eduardo Duhalde) deslizó el nombre del entonces embajador argentino ante la Unión Europea (UE), Roberto Lavagna, de origen justicialista y que había sido secretario de Industria en el Ministerio de Economía de Alfonsín. Una breve conversación telefónica con el presidente de la Nación hizo que el entonces diplomático volara desde Bruselas a Buenos Aires y en menos de 48 horas se convirtió en el titular del Palacio de Hacienda. Lavagna había tenido una gran virtud para convencer a Duhalde en esa charla transatlántica: fue el único que le planteó al bonaerense un panorama no tan apocalíptico, que le mostró ciertas cartas externas que podían favorecer la salida de la crisis (entre ellas el aumento que venía viendo de los precios internacionales de los commodities) y que le aclaró que pensaba que el poder era político y de los políticos y que el ministro de Economía debía subvertirse a las órdenes del presidente.

Lavagna mantuvo suspendidos los pagos a los acreedores privados y se concentró en una negociación con los organismos financieros de crédito, especialmente el FMI. Tomó como una cuestión personal la comunicación con la dura Anne Krueger y trabó diálogo con Paul O’Neil, el nuevo secretario de Tesoro norteamericano. Ya en julio de 2003 viajó a Washington, en días políticos complicados: Duhalde decidía adelantar las elecciones presidenciales a marzo de 2003, luego de las muertes de Darío Santillán y

Maximiliano Kosteki en un acto de represión en el puente Pueyrredón que une la capital Federal con la ciudad de Avellaneda. Duhalde consideró que políticamente su poder se estaba agotando y que no podría sostener las durísimas decisiones que se venían por delante, incluyendo la reestructuración de la deuda argentina.

El bonaerense tomó dos decisiones: elegir al santacruceño Néstor Kirchner como su candidato y suspender cualquier negociación o determinación que implicara condicionar al próximo jefe de Estado en cuanto a su capacidad de movimiento de negociación de la deuda externa. Luego, le impondría, además, como parte de su apoyo electoral, medio gabinete; entre ellos la continuidad de Lavagna como ministro de Economía del futuro gobierno peronista de Kirchner. El patagónico no planteó problemas ante esta “sugerencia”; de hecho venía siguiendo de cerca las negociaciones con los organismos internacionales y consideraba a Lavagna un hombre hábil y sabio en un momento económico crítico. Lo necesitaba para encarar los problemas más serios de la economía de esos años. Ya llegaría el tiempo en que impondría la máxima con la que había gobernado en Santa Cruz: el ministro de Economía no debe ser poderoso porque termina condicionando al Presidente.

En ese marco electoral y de recambio presidencial, y sabiendo que la apuesta a la continuidad vía Néstor Kirchner era bastante segura, Lavagna tomó una decisión clave en ese marzo de 2003, luego de un viaje a Washington. Al no ver respuestas positivas de parte del FMI para un acuerdo global que le permitiera avanzar en una reestructuración seria de la deuda, y cansado de las discusiones sin sentido con la número dos del organismo, Anne Krueger, que sólo le proponía más ajustes y cada día “le corría el arco” reclamándole más medidas de reducción de gastos imposibles de aplicar en medio de la crisis política y social en que se encontraba el país, decidió en julio de 2003 declarar también el default ante los organismos financieros internacionales. Ya había sido nombrado ministro de Economía del sucesor de Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner.

Como conclusión, y sobre el tratamiento del tema de la deuda en default durante su mandato, Duhalde sostuvo la decisión de mantener la suspensión transitoria de los pagos de los intereses y el capital, avalando en los hechos el anuncio del default de Adolfo Rodríguez Saá. Aún confiaba la Argentina que el FMI que dirigía entonces el alemán Horst Köhler (un

hombre que siempre le huyó a los problemas argentinos) y Anne Krueger (la que efectivamente manejaba el caso de la crisis de ese molesto país sudamericano), junto con el gobierno de George W. Bush y el apoyo de la comunidad internacional, harían una especie de pool solidario para que en algún momento más o menos cercano en el tiempo se lanzara la reestructuración de la deuda, sobre la base siempre de una quita de un 70%. No pudo ser posible, y por decisión propia, imperio de las circunstancias y recomendación de Roberto Lavagna, el bonaerense dejó en manos de su sucesor, Néstor Kirchner, el tratamiento final del tema del endeudamiento y la negociación final con los acreedores. Sean estos privados u organismos financieros internacionales.

Para los fondos buitres y su estrategia, sin el reconocimiento formal y por escrito que la Argentina no pagaría el 100% de la deuda emitida y que lanzaría un plan de reestructuración con una quita efectiva del pago de capital e intereses, sería imposible litigar ante los tribunales internacionales. Hasta ese momento la Argentina era una especie de paria del mundo económico y financiero mundial, fuera de regla y debatiéndose su futuro sin mayores apoyos internacionales que sus vecinos latinoamericanos, España (cuidadosa de sus inversiones y temerosa de eventuales nacionalizaciones) y el BID (que había sostenido los créditos al país y financiado los planes sociales de Duhalde jefes y jefas de hogar). Fuera de eso, la Argentina era el objetivo preferido de economías, analistas políticos, documentalistas, periodistas y cualquier otro observador, medianamente serio o no tanto, sobre lo que no se debía hacer para volverse un país pobre. Nuevamente, como sucedía desde el default, habría que esperar. Los buitres, ya habiendo comido las carroñas del default, comenzarían a sobrevolar esperando el momento oportuno para accionar legalmente y presionar al gobierno argentino, cualquiera sea su presidente, eso era lo de menos. Mientras tanto, y ya con más de U\$S 10.000 millones nominales en sus carteras, dejarían de comprar bonos argentinos en default.